

C.A. de Santiago.

Santiago, siete de julio de dos mil veintidós.

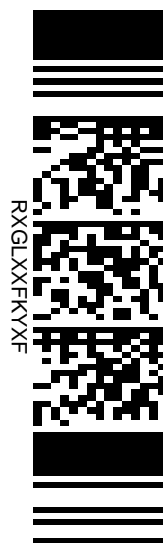
Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Enrique Escandón Slater, abogado, quien interpone recurso de protección a favor de **Hernán David Goas Alvarado**, cédula nacional de identidad número 12.403.943-6, y en contra de la **Dirección General de Movilización Nacional**, en razón del acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la cancelación de la inscripción que el recurrente tiene respecto de un arma de fuego, lo que estima vulnera la garantía contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que pide ordenar al recurrido dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 002504, de 16 de septiembre de 2021; y la devolución inmediata de su arma de fuego por parte de la autoridad fiscalizadora correspondiente, con costas.

Para fundar su recurso expone que con fecha 16 de septiembre de 2021, el Director General de la Dirección General de Movilización Nacional, mediante Resolución Exenta N° 002504, determinó cancelar la inscripción que el recurrente tiene respecto de un arma de fuego y que corresponde a una pistola marca Glock 17, calibre 9, serie N° BENH171. Agrega que dicha Resolución Exenta fue notificada al recurrente con fecha 9 de noviembre de 2021, oportunidad en la cual también el actor hace entrega del arma a la autoridad fiscalizadora.

Explica que la resolución referida se funda en el hecho que con fecha 25 de noviembre del año 2003, el recurrente fue condenado a la pena de 301 días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de manejo en estado de ebriedad en causa RIT N° 403-2003, seguida ante el Juzgado de Letras de San Vicente, la que según lo dispone el inciso quinto del artículo 5 A de la Ley 17.798, sobre “Control de Armas”, en relación con el artículo 78 de su reglamento complementario, configura la causa sobreviniente que inhabilita al recurrente, para mantener inscripción vigente de la ley citada.

Explica que la inscripción del arma en favor del recurrente data del año 2017 y, según se ha señalado y refiere la resolución recurrida, la condena en su contra data del año 2003, añadiendo que el artículo 5 A de la Ley precitada, mediante el cual se estableció en su letra d) el requisito de no ser



condenado por crimen o simple delito para inscribir un arma, recién fue incorporado mediante la Ley N° 20.014, del año 2005, es decir, dos años después de la condena que le fue aplicada al recurrente.

Sostiene que la misma norma autoriza la inscripción en el caso de personas que no hayan sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, previo informe del Director General de Movilización Nacional cumpliéndose los requisitos ahí establecidos, concluyendo que al recurrente le inscriben su arma en el año 2017, cuando se tenía absoluto conocimiento que había sido condenado el año 2003, pero que, atendido que la pena aplicada en su contra no era aflictiva, pudo operar la inscripción del arma en su beneficio.

Indica que la hipótesis establecida en el artículo 5 A de la citada Ley es la sobreviniencia, esto es, algo que ocurre o pueda ocurrir en el futuro, con posterioridad, y no hacia atrás, hacia el pasado, ya que naturalmente si el año 2017 se inscribió el arma, constando que el recurrente tenía una condena menor el año 2003, no se le puede aplicar la ley de manera retroactiva y dejar sin efecto o cancelar la inscripción a su favor.

Finalmente sostiene que al inscribirse al recurrente el arma de fuego, conforme las normas establecidas en la Ley N° 17.9798, es prueba suficiente que éste cumplía con todos los requisitos para haberlo hecho y, la materialización de dicha inscripción constituye un derecho adquirido para el recurrente, el que no puede desconocerse, y dicho derecho al momento de practicarse la inscripción respectiva, se incorpora en el patrimonio del recurrente, por lo que pretender cancelar dicha inscripción constituye una vulneración al Derecho de Propiedad, previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República;

Segundo: Que, evacuó informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En lo que atañe al recurso, refiere que durante el mes de junio de 2021, la Contraloría General de la República le notifica el informe final N° 899/2019, en el cual se le observa la existencia de numerosas personas, usuarias de la ley de control de armas, quienes a la fecha del informe del ente fiscalizador mantenían autorizaciones de tenencia o posesión de armas, en circunstancias que tenían antecedentes penales, por lo que dispuso,

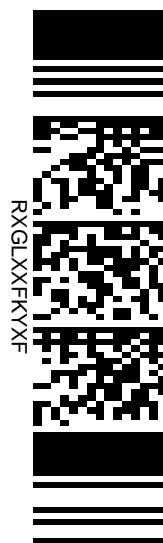


mediante la Resolución N° 001632, de 1 de julio de 2021, el bloqueo en el sistema de registro de armas de todos aquellos usuarios cuyas inscripciones fueron observadas por las causas ya referidas, verificando así que el recurrente era una de las personas incluidas en el informe de la Contraloría, ya que fue condenado por el Juzgado de Letras de San Vicente a la pena de 301 días de presidio como autor del delito de conducción en estado de ebriedad, lo anterior con fecha 25 de noviembre de 2003, por lo que se procedió a dictar la Resolución N° 002504 de 2021, mediante la cual se canceló la autorización de inscripción de arma de fuego concedida al recurrente durante el año 2017, otorgando un plazo con objeto de poder transferir el arma de fuego a un tercero que cumpliera los requisitos para mantener inscripciones vigentes de acuerdo a la Ley de Control de Armas o para entregar la misma para su destrucción.

Refiere que no es efectivo que la autoridad fiscalizadora tuviere absoluto conocimiento de la condena del recurrente al momento de otorgar la autorización para inscribir el arma de fuego, ya que la autoridad fiscalizadora no tiene permanente ni usual acceso al sistema de Registro Nacional de Condenas del Registro Civil.

Añade que la circunstancia de habérsele en el pasado otorgado al recurrente autorizaciones de tenencia o posesión de armas de fuego pese a sus antecedentes penales es materia de actual revisión por parte de la Dirección General, la cual en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus obligaciones legales, representará las eventuales ilegalidades a dichas autoridades fiscalizadoras y las instruirá respecto de las medidas que deberán adoptar para solucionarlas. Menciona que esta equivocación en que pudo haber incurrido la autoridad fiscalizadora, no tiene la virtud de transformar en legal la autorización ilegal otorgada al recurrente, toda vez que tenía antecedentes penales al momento de solicitar la inscripción del arma de fuego, guardando silencio, no obstante lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil.

Manifiesta que no es efectivo que se haya autorizado la inscripción del recurrente mediante la norma excepcional establecida en el artículo 5A de la Ley de Control de Armas para casos de condenas por delitos que no merezcan pena aflictiva, toda vez que dicha autorización debe imponerse por



resolución fundada al efecto y por un procedimiento especial de cargo del solicitante. indicando finalmente que la cancelación de la autorización de inscripción no afecta su derecho de propiedad, en virtud de lo preceptuado en el artículo 103 de la Constitución Política de La República que dispone que ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que una ley aprobada con quorum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.

Aunado a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Control de Armas que establece una prohibición absoluta respecto de la tenencia o posesión de armas de fuego, siendo la regla general que en Chile está prohibida, excepcionalmente se considera tal posibilidad a aquellas personas que cumplan con una serie de requisitos, para ser autorizados a tener o poseer armas de fuego (hasta 2 por regla general y para fines de defensa personal)

Tercero: Que es útil señalar que, como reiteradamente se ha determinado, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales, contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que, a su vez, la **arbitrariedad** necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuaciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, medida y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de **ilegalidad** conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

Que, en consecuencia, de la propia definición del recurso de protección aparece que esta acción cautelar tiene como requisito de la esencia, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.



Cuarto: Que el acto que el recurrente estima ilegal y arbitrario, vulneratorio de la garantía del derecho de propiedad, lo constituye la **Resolución Exenta N° 002504 de 16 de septiembre de 2021 emanada del Director General de la Dirección de Movilización Nacional**, que dispone la cancelación de la inscripción otorgada el año 2017 de un arma de fuego que el recurrente registra en la base de datos del organismo.

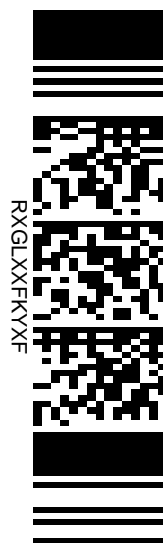
El fundamento de esta Resolución, radica en haberse configurado una causa sobreviniente que inhabilita al recurrente para mantener inscripciones de armas a su nombre, atendido lo dispuesto en el artículo 5 A de la Ley 17.798 y artículo 78 de su Reglamento, en mérito de haber sido condenado el 25 de noviembre de 2003 por el Juzgado de San Vicente de Tagua Tagua, a la pena de 301 días de presidio menor en su grado mínimo en su calidad de autor del delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad.

Quinto: Que procede determinar en primer término, si el Director de la Dirección de Movilización Nacional, **ha incurrido en un acto ilegal al dictar la Resolución Exenta N° 002505.**

Dicho acto se fundamentó en el artículo 5 A de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en relación al artículo 78 del Reglamento.

Primeramente el artículo 5 A de la Ley 17.798 establece en términos generales, y en armonía con la norma del artículo 103 de la Constitución Política de la República, que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección de Movilización Nacional, estará a cargo de la supervigilancia y control de las armas, función que se traduce en la facultad de otorgar o denegar las autorizaciones, permisos e inscripciones que allí se contemplan; asimismo, dispone que ninguna persona podrá poseer o tener armas sin las autorizaciones respectivas, que toda arma de fuego deberá ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor en un registro nacional a cargo de dicha Dirección de Movilización, y que ésta podrá, por resolución fundada, denegar, suspender, condicionar o limitar las autorizaciones que exige esa ley.

Específicamente, el artículo 5 A, dispone en lo pertinente, que “las autoridades señaladas en el artículo 4° sólo permitirán la inscripción de una o más armas cuando su poseedor o tenedor cumpla con los siguientes requisitos:



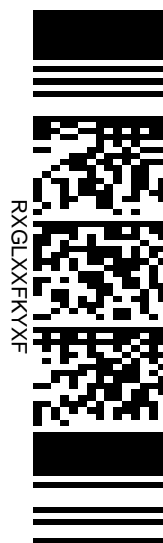
d) No haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se acreditará con el respectivo certificado de antecedentes. Sin embargo, en el caso de personas que no hayan sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, previo informe del Director General de Movilización Nacional, podrá autorizar se practique la inscripción del arma por resolución fundada, la que deberá considerar la naturaleza y gravedad del delito cometido, la pena aplicada, el grado de participación, la condición de reincidencia, el tiempo transcurrido desde el hecho sancionado y la necesidad, uso, tipo y características del arma cuya inscripción se requiere (...).

Si, por circunstancia sobreviniente, el poseedor o tenedor de un arma inscrita pierde las aptitudes consignadas en la letra c) o es condenado en conformidad con la letra d), o bien sancionado en los procesos a que se refiere la letra f), la Dirección General de Movilización Nacional deberá proceder a cancelar la respectiva inscripción, reemplazándola por una nueva a nombre de la persona que el poseedor o tenedor original señale y que cuente con autorización para la posesión o tenencia de armas (...)

A su vez el artículo 78 del Reglamento reza:

“En caso que la Autoridad Fiscalizadora, tomare conocimiento, que el poseedor o tenedor de un arma inscrita, ha sido sancionado por delitos establecidos en el artículo N° 76° letras e) y f) de este reglamento o pierda las aptitudes físicas o psíquicas, deberá informarlo a la Dirección General, con el fin que se proceda a cancelar la respectiva inscripción, notificando este hecho al poseedor o tenedor mediante carta certificada enviada al domicilio registrado en la inscripción del arma por el afectado, estableciendo en dicha carta un plazo perentorio no superior a 30 días para la transferencia de la o las armas a nombre de un tercero quien a su vez deberá cumplir con los requisitos establecidos para la inscripción de armas. La Autoridad Fiscalizadora deberá verificar el cumplimiento de esta transferencia, y, en caso de incumplimiento procederá a denunciar la tenencia ilegal de armas a los órganos competentes.

Sexto: Que en lo tocante al actuar ilegal que se reprocha, atendidas las amplias facultades que la Ley y la Carta Fundamental otorgan a la dirección de Movilización Nacional respecto al control y supervigilancia de la



posesión y tenencia de las armas de fuego, y el hecho de haber tomado conocimiento en forma posterior de que el recurrente fue condenado por el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, cabe concluir que la resolución fue dictada por la autoridad competente, en uso de sus facultades legales, **razón por la cual no puede estimarse que la Resolución Exenta N° 002505 fue dictada al margen de la Ley.**

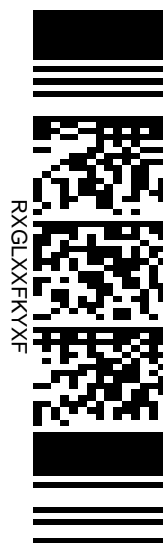
Séptimo: Que superada la faz de legalidad, procede determinar en segundo término, si el Director de la Dirección de Movilización Nacional, **ha incurrido en un acto arbitrario al dictar la Resolución Exenta N° 002505.**

Que en este sentido, es dable señalar que la **arbitrariedad** necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuaciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, medida y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Que como se desprende de lo expresado, la arbitrariedad materia de un recurso de protección, implica una carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de alguna de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental

En el caso de autos, sustenta **la causal sobreviniente** aludida por la autoridad una condena de 25 de noviembre de 2003 dictada por el Juzgado de San Vicente de Tagua Tagua en causa RIT 403-2003, por un delito de manejo en estado de ebriedad condenado a la pena de 301 días de presidio menor en su grado mínimo.

Que tal como palmariamente se advierte, la condena aludida se encuentra cumplida y prescrita para todos los efectos legales, conforme lo dispone los artículos 97 y 101 del Código Penal, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 38 inciso 3° de la Ley N° 18.216 que establece “*el cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá*



mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuarios”.

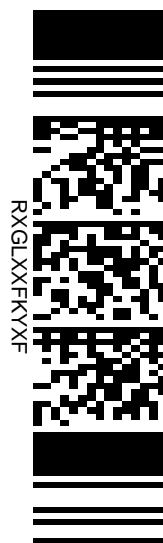
Octavo: Que ponderados los antecedentes conforme las reglas de la sana crítica, se desprende que la resolución Exenta recurrida se da cuenta de un acto consistente en la decisión de cancelación de inscripción **que excede el juicio de razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad, lo que trae aparejada que su actuación sea arbitraria.**

En efecto, teniendo presente la data de la condena penal impuesta al protegido, misma que conforme la normativa invocada por la recurrida justificaría su dictamen, se desprende que un acontecimiento de tan antigua época prescrito y por un ilícito de la entidad y naturaleza por el cual el recurrente habría sido sancionado, **no se corresponde con un antecedente que materialmente importe un hecho sobreviniente que sostenga suficientemente la cancelación cuestionada.** Debiendo tenerse presente además, que la inscripción del recurrente data del año 2017, aunado a que el espíritu contenido en el mismo artículo 5 A de la Ley N° 17.798, igualmente implica a la autoridad ponderar respecto de las personas no condenadas a una pena aflictiva *“la naturaleza y gravedad del delito cometido, la pena aplicada, el grado de participación, la condición de reincidencia, el tiempo transcurrido desde el hecho sancionado y la necesidad, uso, tipo y características del arma cuya inscripción se requiere”.*

Circunstancias que por lo ya razonado, son plenamente aplicables al efecto, y que debieron ser analizadas al momento de decretar en definitiva la cancelación de la inscripción que se reclama.

Noveno: Que en este orden de ideas, coligiéndose que la conducta reclamada afecta indebidamente el derecho de propiedad que el recurrente detenta sobre la inscripción cuya cancelación arbitrariamente se decretó, la acción intentada será acogida en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, **se ACOGE**, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Enrique Escandón Slater en favor de **Hernán David Goas Alvarado** en contra de la **Dirección General de Movilización Nacional**,



SÓLO EN CUANTO, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 002504 dictada por la Dirección General de Movilización Nacional. Debiendo el recurrente una vez ejecutoriada la presente resolución, solicitar la devolución del arma de fuego conforme los procedimientos y documentación requerida al efecto, ante los organismos pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (s) Claudia Santos Silva.

N°Protección-41394-2021.

Pronunciada por la **Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el Ministro Alejandro Aguilar Brevis, e integrada por la Ministra (s) Claudia Santos Silva y el abogado integrante José Gutiérrez Silva.



Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Alejandro Aguilar B., Ministra Suplente Claudia Andrea Santos S. y Abogado Integrante Jose Ramon Gutierrez S. Santiago, siete de julio de dos mil veintidós.

En Santiago, a siete de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

